

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



| APELACIÓN - SENTENCIA |   |
|-----------------------|---|
| DEMANDANTE            | CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO   |
| DEMANDADO             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.   |
| RADICADO              | 05001-31-05-023-2019-00188-01   |
| MAGISTRADA PONENTE    | MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  |
| TEMA                  | Pensión de jubilación convencional, compartibilidad con la pensión de vejez reconocida en el régimen de prima media |
| DECISIÓN              | Revoca y condena.   |

Medellín, cinco (5) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO** contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 034**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ANTECEDENTES**

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día 12 de julio de 2021.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO nació el 5 de mayo de 1953, y durante su vida laboral se desempeñó como trabajadora oficial del extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ocupando el cargo de “Secretaria Clínica”, entre el 10 de noviembre de 1993 y el 9 de noviembre de 1994, y luego entre el 16 de julio de 1995 y el 31 de marzo de 2015, fecha en que fue desvinculada del servicio en razón de la liquidación definitiva de la entidad, con una asignación salarial mensual de \$1.620.872.

Que el 31 de octubre de 2001 la organización sindical denominada SINTRASEGURIDAD SOCIAL suscribió una Convención Colectiva de Trabajo con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES estableciendo un régimen pensional más ventajoso que el legalmente establecido (art. 98), al cual se hizo beneficiaria la aquí demandante por contar con más de 50 años de edad, y 20 años de servicios, toda vez que la vigencia de la pensión de jubilación convencional se extendió hasta el año 2017.

Que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDAD SOCIAL se encontraba vigente para el 31 de marzo de 2015, fecha en que culminó la liquidación del ISS, y a partir de ese momento las obligaciones pensionales contraídas por el ISS empleador quedaron a cargo de la UGPP.

Aduce el escrito introductorio que, al creer reunidos los requisitos convencionales, la actora elevó solicitud ante la UGPP el 13 de junio de 2018, pero dicha entidad mediante resolución N° RDP 036489 del 6 de septiembre de 2018, negó la pensión de jubilación convencional deprecada, argumentando que la actora había cumplido el requisito de la edad pensional con posterioridad al 31 de julio de 2010.

Finalmente, se indica en la demanda que a través de la resolución GNR-80986 del 18 de marzo de 2015, modificada por la VBP-7851 del 15 de febrero de 2016 y la GNR-337892 del 28 de octubre de 2015, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, le concedió a la demandante la pensión de vejez en cuantía mensual de \$1.735.896 a partir del 1º de abril de 2015.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se declare que a la demandante CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO le asiste derecho a la pensión de jubilación convencional contenida en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004, suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, a partir del 1º de abril de 2015, fecha siguiente al retiro del servicio, ordenándose el pago del mayor valor de la pensión a cargo de la UGPP a partir del momento en que la actora comenzó a percibir la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES; se ordene la indexación del retroactivo adeudado, y se impongan las costas del proceso a cargo de la entidad accionada.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la UGPP través de su apoderada judicial dio respuesta oportuna según consta a folios 153 y ss del expediente digital, aceptando como ciertos los hechos relativos a la edad de la demandante, la liquidación del ISS, la solicitud pensional y la respuesta negativa brindada por la entidad a través del acto administrativo anunciado en la demanda, sin que le consten aquellos supuestos que alude a la vinculación laboral de la demandante con el ISS, y sus extremos temporales,

pues la UGPP no hizo parte de esta relación, ni tampoco tiene bajo su custodia el expediente administrativo de la demandante, siendo los restantes supuestos fácticos, simples apreciaciones subjetivas, jurídicas y jurisprudenciales de la parte demandante, que serán objeto del debate probatorio, se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, y en su defensa presentó las excepciones de fondo que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; y PRESCRIPCIÓN”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de apelación, la juez a-quo en audiencia pública celebrada el día 3 de febrero de 2022, declaró que la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO, no es beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la Organización Sindical denominada SINTRASEGURIDAD SOCIAL.

En consecuencia, ABSOLVIÓ a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso las costas del proceso en la primera instancia a cargo de la demandante, fijándole como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, si bien la demandante contaba con más de 60 años de edad para la fecha en que se produjo su desvinculación de la entidad oficial (31 de marzo de 2015), no tenía 20 años de servicios al 31 de julio de 2010, fecha límite establecida en el acto legislativo 01 de 2005 para conservar las reglas de carácter pensional que regían a la fecha de vigencia de la referida reforma constitucional, originadas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Inconforme con la decisión de primer grado, el apoderado judicial de la demandante, presentó recurso de apelación, a través del cual solicita la revocatoria total de la sentencia de primer grado, y en su lugar se profiera sentencia en la que se condene al reconocimiento de la pensión de jubilación convencional a favor de la señora ECHEVERRI NARANJO.

Dice no compartir que la *A Quo* se hubiere apartado de la línea jurisprudencial trazada por la H. Corte Suprema de Justicia en aquellos casos análogos con fundamentos fácticos y pretensiones similares a las aquí debatidas, dejando en claro que la Corte ha fijado el alcance del acto legislativo 01 de 2005, y la interpretación que debe dársele a la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 (SL12489 de 2017, SL3063 de 2018, SL3335 de 2020).

Que lo resuelto por la funcionaria judicial de primer grado desconoce la figura del precedente judicial analizada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-354 de 2017, a sabiendas de su obligatorio cumplimiento en los jueces de menor jerarquía, quienes solo pueden eludir su aplicación, exponiendo los argumentos facticos y jurídicos que conduzcan a una solución disímil a la ya estudiada por el órgano de cierre.

Finalmente expone el recurrente que, si bien es cierto, el acto legislativo 01 de 2005, restringió de manera general las reglas pensionales contenidas en pactos, convenciones, laudos, etc., no podía pasarse por alto, la excepción a esa regla, en aquellos eventos donde se hubiesen acordado pensiones convencionales con un término de vigencia que excediere el 31 de julio de 2010, que es precisamente la Pensión de Jubilación Convencional reclamada por la actora donde se estableció el año 2017 como su plazo máximo de reconocimiento, lo anterior en garantía de los derechos adquiridos.

### **Alegatos de conclusión**

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente los apoderados judiciales de ambas partes hicieron uso de los alegatos de instancia.

La apoderada judicial de la UGPP, solicita se confirme la sentencia absolutoria de primer grado, al considerar que de conformidad con el acto legislativo 01 de 2005, no es procedente reconocer la pensión de jubilación de acuerdo a la Convención Colectiva, toda vez que la ley no permite efectuar reconocimientos efectivos después de la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo.

Señala que cuando la demandante suscribió el acuerdo, ya estaba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual, en el parágrafo 2, prohíbe expresamente que se consagren beneficios distintos a los establecidos en la Ley General de Pensiones; y sumado a ello, el parágrafo transitorio 3 dejó en claro que: *“en los pactos o convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este acto legislativo y el 31 de julio de 2012, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes”*, concluyéndose así, que la demandante no cuenta con un derecho adquirido ni con una expectativa legítima, en la medida que para la fecha en que reunió los requisitos convencionales la cláusula relacionada con la prestación social se encontraba sin vigencia.

Por su parte, el apoderado judicial de la demandante insiste en el reconocimiento de la pensión de jubilación deprecada, argumentando al respecto que si bien la redacción del parágrafo transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005 ha suscitado discusión con respecto a su alcance, en razón de que el mismo establece que los regímenes convencionales de orden convencional conservarían su vigencia “por el término inicialmente estipulado”, pero luego dispone que “en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”, no puede perderse de vista la interpretación dada a esa normativa por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual todos los regímenes pensionales extralegales dejaron de regir el 31 de julio de 2010, con

una sola excepción, relativa a las convenciones colectivas de trabajo celebradas antes del 22 de julio de 2005 en las cuales se hubiera pactado el régimen pensional extralegal para estar vigente más allá del 31 de julio de 2010, supuesto en el que es preciso respetar el término de vigencia acordado por las partes.

Asegura que el juzgado de primera instancia se equivocó al desconocer el derecho a la pensión de jubilación de la demandante en tanto: i) la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con SINTRASEGURIDAD SOCIAL el 31 de octubre de 2001 se estableció que el régimen pensional de carácter extralegal en ella pactado estaría vigente hasta el año 2017; ii) el régimen pensional contenido en la convención colectiva de trabajo celebrada por el ISS con SINTRASEGURIDAD SOCIAL debe ser respetado para aquellos trabajadores que hubieran causado su derecho antes de finalizar el año 2017; iii) desconoció con su decisión una línea jurisprudencial sólida y reiterada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la interpretación del Parágrafo 3º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 y del alcance del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado, y en su lugar se acceda a la pensión deprecada.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de jubilación convencional, compartibilidad de la pensión – mayor valor a cargo de la UGPP.**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar bajo el grado jurisdiccional de consulta, si la demandante CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO causó o no el derecho a una pensión de jubilación convencional, en los términos del art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y su Organización Sindical "SINTRASEGURIDADSOCIAL"; y en el eventual caso de acreditarse esta prestación, deberá la Sala establecer a cuánto asciende el retroactivo adeudado y/o el mayor valor de la mesada pensional a cargo de la UGPP, y si esta suma puede ser objeto de indexación de las condenas.

Para resolver lo pertinente valga precisar algunos asuntos que no resultan ser objeto de controversia en el proceso:

- Que la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO nació el día 10 de mayo de 1953, según da cuenta el registro civil de nacimiento aportado con la demanda (fls.16), por lo que cumplió los 50 años de edad, el mismo mes y día del año 2003.
- Que la actora prestó sus servicios al extinto Instituto de Seguros Sociales, entre el 10 de noviembre de 1993 y el 9 de noviembre de 1994, y luego entre el 6 de julio de 1995, y el 31 de marzo de 2015 con 5 días de interrupción, detentando la calidad de trabajadora oficial, para un total de 7.435 días laborados equivalentes a 20,65 años de servicios, según lo reconoce la UGPP en la resolución N° RDP36489 del 06 de septiembre de 2018, mediante la cual le fue negada la pensión de jubilación pensional deprecada.
- Y finalmente está acreditado, que a la actora le fue reconocida una pensión legal de vejez por parte de COLPENSIONES, a través de la resolución N° GNR-80986 del 18 de marzo de 2015 en cuantía mensual de \$1.553.414, y que fue reliquidada a través de las resoluciones N° GNR 337892 del 28 de octubre del 2015, y VPB-7581 del 15 de febrero de 2016., quedando la mesada pensional en la suma de \$1.735.896 a partir del 1° de abril de 2015.



### **Pensión de jubilación**

Del examen de la prueba documental, resulta evidente que la demandante, se encontraban vinculada al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al momento de entrar en vigencia la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, la cual fue aportada con la demanda (expediente digital – fls. 66 y ss), con constancia de depósito ante el Ministerio del Trabajo.

Pues bien, debe decirse que la citada convención previó en su artículo 98, una pensión de jubilación, así:

*“El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales.*

*(...)*

*Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos Años de servicio.*

*Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio...”*

En el caso que se examina, está acreditado que la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO, contaban con más de 20 años de servicios y 50 años de edad para la fecha en que reclamó la pensión de jubilación convencional, que en todo caso lo fue con posterioridad al **31 de julio de 2010**.

Sin embargo, para esta calenda ya se encontraba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, reformativo del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el cual en su artículo 1°, párrafo transitorio N° 3°, dejó sin efectos las reglas pensionales contenidas en pactos, convenciones colectivas de

trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, las cuales no podrían extenderse más allá del 31 de Julio de 2010, veamos:

*"Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. **En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010**".*

Esta reforma constitucional, ha sido materia de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, se destaca la Sentencia SU-555 del 24 de Julio de 2014, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, donde se abordó la problemática suscitada, particularmente en cuanto a atañe a las disposiciones sobre pensiones convencionales, y lo hizo en estos términos con respecto al parágrafo transitorio N° 3:

*"...la primera frase del parágrafo transitorio 3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. Textualmente señala:*

*(...)*

*Por otro lado, la **segunda parte de este parágrafo transitorio** crea una norma de transición para las reglas de carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa fecha, **resaltando, de manera inequívoca, que las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 2010**, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.*

*En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la*

*confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas prórrogas **no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010**, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el párrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010.*

*Del análisis de los mandatos constitucionales descritos, es posible concluir que después del 31 de julio de 2010 **ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y convenciones colectivas**, salvo que los existentes antes de la entrada vigencia del Acto Legislativo estipularán como término inicial, una fecha posterior.*

Visto lo anterior, resulta evidente que la jurisprudencia constitucional no avala la continuidad y los efectos de estos acuerdos convencionales, más allá del **31 de Julio de 2010**, salvo que en la norma convencional se estipule como término de vigencia, una fecha posterior o una inicial de mayor alcance.

También debe tenerse en cuenta que frente al tema del acto legislativo 01 de 2005, la OIT emitió unas recomendaciones al Gobierno Nacional, en respuesta a una queja formulada por varias organizaciones sindicales que denunciaron esta reforma constitucional, y para el asunto que nos interesa, la OIT indicó:

*“ii) en cuanto a las convenciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación, considerando que las convenciones anteriormente negociadas deberían continuar conservando todos sus efectos, incluidos los relativos a las cláusulas sobre pensiones, hasta su fecha de vencimiento, aunque ésta sea después del 31 de julio de 2010, pide al Gobierno que adopte las medidas correctivas pertinentes y que le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto.”*

Pero la Corte Constitucional, en la citada sentencia SU-555 de 2014 manifestó frente a estas recomendaciones lo siguiente:

*“De manera que la primera recomendación de la OIT no cobija: (i) a los trabajadores que soliciten pensiones consagradas en nuevos pactos o convenciones celebrados después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo; o, (ii) a aquellos que cumplen los requisitos para acceder a la prestación convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, **pues no pueden alegar que esperaban recibir pensiones especiales en la medida que para ese momento ya se encontraban vigentes las***

***nuevas reglas constitucionales, por lo tanto sería menos que una expectativa.”***

Similar interpretación frente al tema de las pensiones extralegales fue desplegada en su momento por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la Sentencia SL-1428 del 25 de abril de 2018, con radicación 63.413, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, en el que se abordó alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 frente a la vigencia de los acuerdos convencionales.

Esta alta corporación judicial expresó en la citada providencia que la disposición supralegal, esto es, el párrafo transitorio N° 3 del artículo 1° del acto legislativo 01 de 2005, abrogó la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acuerden, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, que en todo caso finalizaba a más tardar el 31 de julio de 2010.

Dicho criterio jurisprudencial, ya lo traía la misma Corte de tiempo atrás como es el caso de la sentencia SL 12498-2017 en la que trajo a colación la una sentencia del año 2007, con radicación 31.000, según la cual la expresión *“término inicialmente pactado”* allí contenida, hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que *“si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”, así lo explicó:*

*(...) a juicio de esta Corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo*

*01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.*

*La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.*

*La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.”*

Y luego en la sentencia SL2543-2020, la alta corporación judicial, concluyó que, en principio no era posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010.

Este criterio jurisprudencial, dio lugar a entender que el derecho a la pensión de jubilación convencional se causaba al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, y si uno de estos requisitos quedaba satisfecho con posterioridad al 31 de julio de 2010, no habría lugar al beneficio convencional.

Sin embargo, un nuevo estudio de la problemática por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia N° SL3635 del 16 de septiembre de 2020, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, estimó procedente el reconocimiento de esta prestación convencional, a favor de aquellos trabajadores oficiales del extinto ISS, que cumplieron el requisito de tiempo de servicios (20 años) con anterioridad al 31 de julio de 2010, y que la restante condición relativa a la edad (55 años

hombres y 50 años mujeres) quedaba satisfecha hasta el año 2017, pues fue la propia norma convencional la que extendió la vigencia de la convención colectiva hasta esta última anualidad, veamos:

*“...En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, **las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia...**”*

Lo anterior, por cuanto los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen para la Corte, derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia.

Este criterio jurisprudencial fue reiterado recientemente por la Sala de Descongestión de la misma Corte, en la sentencia SL399 del 15 de febrero de 2022 con radicación 75.879, M.P. DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA, en la que se accedió al derecho convencional deprecado, bajo los siguientes argumentos:

*“...En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia.*

*En ese contexto, la Sala debe establecer si el accionante acredita las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 98 convencional para obtener el reconocimiento de la prestación pensional, para lo cual ha*

*de recordarse que son hechos indiscutidos en casación, que ingresó al Instituto de Seguros Sociales el 11 de agosto de 1986 y laboró hasta el 1 de septiembre de 2008 (f.º 53), prestando más de 20 años de servicios a la entidad; y que nació el 5 de junio de 1959, por lo que cumplió 55 años de edad en la misma fecha de 2014, en el cargo de coordinador grado 39....”*

Teniendo en cuenta el actual criterio jurisprudencial referido, mismo que resulta vinculante para los demás funcionarios judiciales que integran la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, esta Sala recoge su anterior postura, y acoge los nuevos razonamientos del órgano de cierre, para resolver la problemática jurídica suscitada, atendiendo las particularidades de la presente litis.

### **CASO CONCRETO**

Descendiendo a la situación específica de la demandante CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO, es evidente que esta fue trabajadora oficial del extinto ISS, entidad donde laboró un total de 7.435 días, en dos periodos, el primero entre el 10 de noviembre de 1993 y el 9 de noviembre de 1994, y el segundo entre el 6 de julio de 1995, y el 31 de marzo de 2015, equivalentes a **20,65 años de servicios.**

Y aunque sea cierto que de ese gran total de tiempo público (20,65 años) de servicios, solamente 16 años y 26 días se encontraban laborados al servicio del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con anterioridad al 31 de julio de 2010, como lo afirmo la juez de primer grado esta última fecha de manera alguna limita el derecho convencional que le asiste a la demandante, pues la misma Convención Colectiva de Trabajo permitió que esa pensión de jubilación estuviere vigente hasta el año 2017, fecha límite para dejar satisfechos los requisitos de tiempo de servicios y edad.

Así lo ha entendido recientemente la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL2410-2022 del 12 de julio de 2022, con radicación N° 88.577 M.P. ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA (Sala de Descongestión N° 4), veamos:

*“Así las cosas, y por la nitidez de los argumentos expuestos de manera previa por esta Sala, prospera la acusación en cuanto se evidencian los errores fácticos y jurídicos del Tribunal, pues no tuvo presente que el artículo 2 convencional estableció que algunas de sus cláusulas tendrían vigencia en períodos distintos al general y, **tampoco advirtió que en el artículo 98 las partes así lo acordaron para otorgar los derechos pensionales, de suerte que no era viable descartarlos por el solo hecho de que se hubieran causado con posterioridad al 31 de julio de 2010.”***

En dicha providencia la Corte Suprema de Justicia, analizó la problemática de una trabajadora oficial del ISS que al igual que la aquí demandante, también contaba con menos de 20 años de servicios al 31 de julio de 2010, y reunió ese requisito convencional antes del año 2017, de lo que es factible concluir que los dos requisitos de causación se podían satisfacer con anterioridad al año 2017, que fue el plazo de vigencia establecido en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004, suscrita entre el ISS y la organización sindical SINTRASEGURIDAD SOCIAL, razones suficientes para concluir que la demandante tiene derecho a la pensión de jubilación deprecada, por satisfacer las exigencias allí señaladas dentro del término de vigencia de la citada convención, debiéndose revocar lo resuelto por la juez de primer grado, para en su lugar acceder a la pensión de jubilación convencional, y su compartibilidad frente a la pensión de vejez que hoy disfruta a cargo de COLPENSIONES, consistente en un mayor valor de la pensión de jubilación a cargo de la UGPP, como quedo previsto en la citada norma convencional:

*“...No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las pensiones de jubilación y de vejez, por ningún motivo podrá recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento (100%) del promedio a que se refiere el presente artículo. por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensión de*



*jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensión de vejez...”*

### **Prescripción, y disfrute pensional**

En relación a la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada, considera la Sala que la misma si esta llamada a prosperar de manera parcial en el sub lite, lo anterior, al haberse reclamado el derecho a la pensión de jubilación convencional el día 26 de junio de 2018, según lo acepta la entidad accionada a folios 22 del expediente digital, esto es, cuando ya había transcurrido el término trienal de prescripción al que aluden los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, contado desde la fecha de causación y exigibilidad de la primera mesada pensional (abril de 2015), pese a que la demanda si se presentó oportunamente dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que fue negado el derecho convencional a través de la resolución N° RDP036489 del 6 de septiembre de 2018, por lo que se encuentra prescrito el mayor valor causado con anterioridad al 26 de junio de 2015.

En relación al valor de la mesada pensional y su retroactivo, estima la Sala que a la actora le atañe las reglas de liquidación previstas en el numeral ii) del art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, esto es, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, por haber cumplido los 20 años de servicio en el año 2015, cuando también se produjo su retiro de la entidad oficial, veamos:

*“(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.”*

Con la demanda se aportó una certificación electrónica de tiempos de servicios de la señora CRUZANA MARIA ECHEVERRI NARANJO, entre el 1° de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2015, donde se relación todo lo devengado por la actora por concepto de asignación básica mensual, prima de

servicios y vacaciones, auxilio de alimentación y de transporte, conforme la certificación aportada con la demanda visible a folios 28 al 30 del plenario.

Datos que fueron utilizados por la Sala para realizar su propia liquidación, veamos:

| DESDE    | HASTA     | IBC O SALARIO   | No. DIAS | SALARIO INDEXADO | PROMEDIO   | AÑO FINAL | INDICE IPC FINAL | AÑO INICIAL | INDICE IPC INICIAL |
|----------|-----------|-----------------|----------|------------------|------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| 1-abr-12 | 30-abr-12 | \$ 1.516.103,00 | 30       | \$ 1.641.026     | \$ 45.584  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-may-12 | 31-may-12 | \$ 1.872.613,00 | 30       | \$ 2.026.911     | \$ 56.303  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-jun-12 | 30-jun-12 | \$ 5.909.406,00 | 30       | \$ 6.396.324     | \$ 177.676 | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-jul-12 | 31-jul-12 | \$ 1.165.097,00 | 30       | \$ 1.261.098     | \$ 35.030  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-ago-12 | 31-ago-12 | \$ 476.221,00   | 30       | \$ 515.460       | \$ 14.318  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-sep-12 | 30-sep-12 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.718.203     | \$ 47.728  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-oct-12 | 31-oct-12 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.718.203     | \$ 47.728  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-nov-12 | 30-nov-12 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.718.203     | \$ 47.728  | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-dic-12 | 31-dic-12 | \$ 3.702.805,00 | 30       | \$ 4.007.906     | \$ 111.331 | 2014      | 82,47            | 2011        | 76,19              |
| 1-ene-13 | 31-ene-13 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.677.353     | \$ 46.593  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-feb-13 | 28-feb-13 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.677.353     | \$ 46.593  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-mar-13 | 31-mar-13 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.677.353     | \$ 46.593  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-abr-13 | 30-abr-13 | \$ 1.587.405,00 | 30       | \$ 1.677.353     | \$ 46.593  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-may-13 | 31-may-13 | \$ 1.388.783,00 | 30       | \$ 1.467.477     | \$ 40.763  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-jun-13 | 30-jun-13 | \$ 5.846.882,00 | 30       | \$ 6.178.188     | \$ 171.616 | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-jul-13 | 31-jul-13 | \$ 1.353.285,00 | 30       | \$ 1.429.967     | \$ 39.721  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-ago-13 | 31-ago-13 | \$ 216.525,00   | 30       | \$ 228.794       | \$ 6.355   | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-sep-13 | 30-sep-13 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.716.433     | \$ 47.679  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-oct-13 | 31-oct-13 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.716.433     | \$ 47.679  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-nov-13 | 30-nov-13 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.716.433     | \$ 47.679  | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-dic-13 | 31-dic-13 | \$ 3.791.119,00 | 30       | \$ 4.005.938     | \$ 111.276 | 2014      | 82,47            | 2012        | 78,05              |
| 1-ene-14 | 31-ene-14 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.683.804     | \$ 46.772  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-feb-14 | 28-feb-14 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.683.804     | \$ 46.772  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-mar-14 | 31-mar-14 | \$ 1.624.389,00 | 30       | \$ 1.683.804     | \$ 46.772  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-abr-14 | 30-abr-14 | \$ 1.519.051,00 | 30       | \$ 1.574.613     | \$ 43.739  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-may-14 | 31-may-14 | \$ 1.771.195,00 | 30       | \$ 1.835.980     | \$ 50.999  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-jun-14 | 30-jun-14 | \$ 3.463.653,00 | 30       | \$ 3.590.342     | \$ 99.732  | 2014      | 82,47            | 2013        | 79,56              |
| 1-jul-14 | 31-jul-14 | \$ 1.654.147,00 | 30       | \$ 1.714.650     | \$ 47.629  | 2014      |                  | 2013        | 79,56              |

|          |           |                 |    |              |            |      |       |      |       |
|----------|-----------|-----------------|----|--------------|------------|------|-------|------|-------|
|          |           |                 |    |              |            |      | 82,47 |      |       |
| 1-ago-14 | 31-ago-14 | \$ 1.654.147,00 | 30 | \$ 1.714.650 | \$ 47.629  | 2014 | 82,47 | 2013 | 79,56 |
| 1-sep-14 | 30-sep-14 | \$ 1.654.147,00 | 30 | \$ 1.714.650 | \$ 47.629  | 2014 | 82,47 | 2013 | 79,56 |
| 1-oct-14 | 31-oct-14 | \$ 4.151.953,00 | 30 | \$ 4.303.818 | \$ 119.551 | 2014 | 82,47 | 2013 | 79,56 |
| 1-nov-14 | 30-nov-14 | 0               | 30 | \$ 0         | \$ 0       | 2014 | 82,47 | 2013 | 79,56 |
| 1-dic-14 | 31-dic-14 | \$ 3.810.304,00 | 30 | \$ 3.949.673 | \$ 109.713 | 2014 | 82,47 | 2013 | 79,56 |
| 1-ene-15 | 31-ene-15 | \$ 1.710.929,00 | 30 | \$ 1.710.929 | \$ 47.526  | 2014 | 82,47 | 2014 | 82,47 |
| 1-feb-15 | 28-feb-15 | \$ 1.710.929,00 | 30 | \$ 1.710.929 | \$ 47.526  | 2014 | 82,47 | 2014 | 82,47 |
| 1-mar-15 | 31-mar-15 | \$ 1.710.929,00 | 30 | \$ 1.710.929 | \$ 47.526  | 2014 | 82,47 | 2014 | 82,47 |

|               |        |
|---------------|--------|
| TOTAL DIAS    | 1080   |
| TOTAL SEMANAS | 154,29 |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ingreso Base de Liquidación -IBL- | \$ 2.132.082,89 |
| Semanas Cotizadas                 | 154,29          |
| Tasa de reemplazo                 | 100%            |
| Valor pensión                     | \$ 2.132.083    |

Efectuados los cálculos aritméticos correspondientes la mesada pensional que le correspondía a la actora, a partir del 1º de abril de 2015, sin perjuicio de la prescripción parcial de mesadas pensionales, era equivalente a la suma de **\$2.132.083**.

| AÑO  | IPC   | PENSIÓN DE VEJEZ | PENSIÓN DE JUBILACIÓN | DIFERENCIA    | MESADAS | SUBTOTAL         |
|------|-------|------------------|-----------------------|---------------|---------|------------------|
| 2015 | 6,77% | \$ 1.735.896,00  | \$ 2.132.083,00       | \$ 396.187,00 | 7,16    | \$ 2.836.698,92  |
| 2016 | 5,75% | \$ 1.853.416,16  | \$ 2.276.425,02       | \$ 423.008,86 | 13      | \$ 5.499.115,18  |
| 2017 | 4,09% | \$ 1.959.987,59  | \$ 2.407.319,46       | \$ 447.331,87 | 13      | \$ 5.815.314,30  |
| 2018 | 3,18% | \$ 2.040.151,08  | \$ 2.505.778,82       | \$ 465.627,74 | 13      | \$ 6.053.160,66  |
| 2019 | 3,80% | \$ 2.105.027,89  | \$ 2.585.462,59       | \$ 480.434,71 | 13      | \$ 6.245.651,17  |
| 2020 | 1,61% | \$ 2.185.018,94  | \$ 2.683.710,17       | \$ 498.691,22 | 13      | \$ 6.482.985,91  |
| 2021 | 5,62% | \$ 2.220.197,75  | \$ 2.726.917,90       | \$ 506.720,15 | 13      | \$ 6.587.361,98  |
| 2022 |       | \$ 2.344.972,86  | \$ 2.880.170,69       | \$ 535.197,83 | 7       | \$ 3.746.384,78  |
|      |       |                  |                       |               |         | \$ 43.266.672,89 |

Y el retroactivo pensional por el mayor valor entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación adeudado a la actora, entre el 26 de junio de 2015, y el 31 de julio de 2022, es equivalente a la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$43.266.672)**, el cual se liquidó teniendo en cuenta 13 mesadas anuales.

A partir del 1° de agosto de 2022, el mayor valor mensual entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez, es de **\$535.197** y estará a cargo de la UGPP sobre las 13 mesadas anuales, el cual deberá incrementarse anualmente conforme al IPC certificado por el DANE.

### **Indexación de las condenas**

Esta Sala, accederá a la pretensión de INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, como mecanismo para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la entidad demandada en pagar el mayor valor de la pensión de jubilación, indexación que debe ser calculada por la UGPP a partir del **26 de junio de 2015**, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo pensional adeudado, y hasta el momento en que se produzca su pago efectivo,

Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia SL359-2021, donde conceptuó la procedencia de la indexación de las condenas sobre las cuales no se impusiera una sanción moratoria, veamos:

*“...la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. De ahí que, si la AFP no paga*

*oportunamente la prestación causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor del crédito.*

*Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real...”*

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la prosperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, las costas procesales en ambas instancias estarán a cargo de la UGPP y a favor de la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO, de conformidad a lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/L (\$1.000.000) equivalente a 1 SMLMV para la anualidad 2022, las de primera instancia deberán ser recalculadas por el a quo en atención a lo ordenado en esta sentencia.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** en su integridad la sentencia objeto de apelación de fecha 3 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto absolvió a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra, para en su lugar, **DECLARAR** que a la señora **CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO** le asiste derecho a la pensión de jubilación convencional contenida en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004 suscrita entre el ISS y la Organización Sindical SINTRASEGURIDADSOCIAL, bajo la modalidad de compartibilidad o mayor valor respecto de la pensión de vejez otorgada por COLPENSIONES, según lo expuesto en procedencia.

**SEGUNDO:** como consecuencia de la anterior declaración, **CONDENAR** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP** a reconocer y pagar a la señora **CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO**, la suma de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$43.266.672)**, a título de retroactivo pensional derivado del mayor valor entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez reconocida por COLPENSIONES, por el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2015 y el 31 de julio de 2022.

A partir del 1° de agosto de 2022, la UGPP deberá continuar pagando a la actora y sobre 13 mesadas anuales, ese mayor valor mensual entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez, que para la presente anualidad 2022 asciende a la suma de **\$535.197**, el cual deberá incrementarse anualmente conforme al IPC certificado por el DANE.

**TERCERO: CONDENAR** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP** a indexar todas y cada una de las mesadas pensionales (mayor valor) desde el 26 de junio de 2015, y hasta el momento en que se efectuó el pago total de la obligación, según lo expuesto en precedencia.

**CUARTO: COSTAS** procesales en ambas instancias a cargo de la UGPP y a favor de la señora CRUZANA MARÍA ECHEVERRI NARANJO, en esta instancia se fijan como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/L (\$1.000.000) equivalente a 1 SMLMV para la anualidad 2022, las de primera instancia deberán ser recalculadas por el a quo en atención a lo ordenado en esta sentencia.

**QUINTO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**SEXTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada